

¿Estamos dispuestos a renunciar a la igualdad?

*Luis Alberto Quevedo**

Resumen:

Explorar la tensión entre la libertad y la igualdad, tal como fueron ideadas y legadas por la revolución francesa parece ser hoy una tarea tan necesaria como inevitable en el campo de las ciencias sociales. El mandato que dejó aquella revolución no funcionó en la mayoría de las experiencias políticas posteriores y durante el siglo XX y las naciones trataron de apaciguar los conflictos gestionando la igualdad, a través de las distintas experiencias del Estado de Bienestar. Pero en el siglo XXI estos conceptos entran en crisis por la tensión entre los intereses de los desposeídos frente al de los poderosos hasta volverlos irreconciliables: la dinámica del capitalismo —dominado por el capital financiero— entra en colisión con ciertas políticas sociales basadas en principios de equidad que introduce este modelo de Estado de Bienestar.

En un informe del año 2016 de la UNESCO, la desigualdad vuelve a ponerse en agenda, ya que puede poner en peligro la sostenibilidad sociedades. Se desarrollan siete dimensiones de la desigualdad y se pone en contexto para explicar su crecimiento. Por esto la Agenda de las Naciones Unidas adopta los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, cuya finalidad específica es “reducir la desigualdad en y entre los países”, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

Algunos de estos temas tienen que ver con la agenda política y económica que está hoy presente en la Argentina. Luego de la elección de un nuevo gobierno en el 2015, ya no aparecen políticas de redistribución del ingreso que no estén ligadas a la teoría del derrame —hecho negado en el informe de la UNESCO—. Entonces vuelve el interrogante por los

* Sociólogo, Profesor Titular de Sociología Política en la UBA. Director de FLACSO Argentina.

principios que inspiran a las políticas públicas y la pregunta por la aceptación de la sociedad de un modelo donde la desigualdad se acentúa. El marketing político toma un lugar central en la constitución de un nuevo poder y un nuevo modelo comunicacional y, al mismo tiempo, se produce un corrimiento del debate económico al cultural, para solidificar un pacto ideológico que rechace el regreso de cualquier pasado populista. Se dismantelan así los principios rectores de la tradición liberal y revolucionaria, vivimos en una posdemocracia, donde se instala la desigualdad como un valor natural o, al menos, como un principio deseable para nuestras sociedades.

Palabras clave: Libertad – Igualdad – Posdemocracia – Política argentina

Abstract:

Explore the tension between freedom and equality, as they were devised and bequeathed by the French Revolution seems to be as necessary as inevitable in the field of the social sciences today. The mandate that left the revolution didn't work in most of the subsequent political experiences and during the 20th century and the Nations tried to appease conflict managing equality, through the different experiences of the welfare state. But in the 21st century these concepts come into crisis by the tension between the interests of the poor face of the powerful to make them irreconcilable: the dynamics of capitalism—dominated by financial capital— comes into collision with certain social policies based on principles of equity introduced by this model of welfare state. A report of the year 2016 of UNESCO, the inequality back to agenda, since it may endanger the sustainability of societies. Seven dimensions of inequality are developed and made in context to explain its growth. Why the Agenda of the United Nations adopted targets for sustainable development, whose specific purpose is to «reduce inequality within and between countries», taking into account the particularities of each case.

Some of these issues have to do with the political and economic agenda is today present in the Argentina. After the election of a new Government by 2015, are no longer income redistribution policies that are not linked to the theory of the spill—fact denied the report of UNESCO—. Then again the question by the principles underlying public policy and the question by the acceptance of society from a model where the inequality is accentuated. Political marketing takes a central place in the Constitution of a new power and a new communication model and, at the same time, there is a shift in the economic debate to the cultural, to solidify an ideologically Pact that rejects the return of any populist past. The guiding principles of the liberal and revolutionary tradition was thus dismantled, we live in a post-democracy, where inequality as a natural value settles, or at least, as a desirable principle for our societies.

Keywords: Liberty – Equality – Post-Democracy – Argentina Policy

1. La tensión entre libertad e igualdad

EL año 2016 marcó nuestro segundo centenario ligado a una gesta militar que se vivió en el territorio americano, pero también fue un momento de cambio y debate institucional, económico, cultural y político. En el siglo XIX, en varios puntos de nuestra América los fundadores de la libertad fueron los “libertadores” en el doble sentido de romper con la corona española y también de fundar otra libertad. El debate por la autonomía política y las condiciones de la independencia no fue menor, sin embargo, no pusieron en el mismo rango la idea de igualdad o fraternidad que venían de la Revolución francesa.

En Europa, en cambio, el siglo XIX fue vivido de otro modo y se lo consideró como el siglo del Colonialismo y de las Revoluciones (conservadoras y obreras), pero sobre todo fue el gran siglo de la “cuestión social” en los viejos y nuevos Estados europeos. También fue el siglo donde nació la idea del Estado Benefactor, como una respuesta a los reclamos sociales y políticos de los obreros: un Estado que al mismo tiempo que daba respuestas a las demandas que provenían de las condiciones de trabajo del capitalismo, regulaba, ordenaba, distribuía y clasificaba a los ciudadanos. Se abrió así otra “igualación” que haría historia: la era del control social minucioso de las burocracias estatales, de las rutinas en las fábricas, de la vida social y también del sistema de expectativas que el Estado tenía respecto de los ciudadanos.

Durante el siglo XIX se pusieron en juego la capacidad que tenían (o no) de producir efectos sociales y políticos los principios que inspiraron a la Revolución francesa y que quedaron como un emblema de la revuelta política que fundó la modernidad, no solo por haber instituido el principio democrático (y el *demos* como protagonista de la escena pública), sino por el legado de sus tres palabras clave: *libertad, igualdad, fraternidad*.

Allí nació el concepto moderno de igualdad, más como un horizonte, como una idea política revolucionaria que como una realidad. Pero ese concepto —colocado al lado del objetivo siempre presente de la conquista de la libertad y del muy francés concepto de la *fraternité*— fundaron una forma de la política que tiñó buena parte del siglo XIX y XX y que llegó a América de manera muy diversa. Al continente americano y no solo a América del Sur. Esa revolución se impuso conceptualmente en Europa, pero también en buena parte del mundo occidental como un modelo (a seguir o a repudiar) y dejó sus marcas en nuestra cultura política.

Un gran lector de esa revolución, de esas marcas y de esa relación difícil y conflictiva entre libertad e igualdad fue, sin lugar a dudas, Alexis de Tocqueville, quien estará más preocupado por las tensiones que se establecen entre esos conceptos que por su solidaridad. O en todo caso, por las consecuencias simbólicas, institucionales y políticas que deja esa tensión en cada una de nuestras sociedades.

En su obra *La democracia en América* dirá el vizconde de Tocqueville que el proceso de igualación de condiciones que se puede constatar en los últimos siglos se debe a la acción del principio democrático de la igualdad que opera en el seno de nuestras sociedades. Este principio actúa, en buena medida, como un “motor de la historia” que tracciona a los hombres a producir cambios en sus condiciones de vida, en sus representaciones y en los entramados instituciones que han sido capaces de crear. No sabe por qué Dios ha puesto a prueba a los hombres haciéndoles creer que son iguales, pero esta convicción no deja de producir cambios en las sociedades modernas.

Por supuesto, no cree Tocqueville que los hombres han devenido iguales ni tampoco que esta igualdad se dé en los hechos. Solo le asombra que este principio esté operando en nuestras sociedades con tal fuerza que puede competir incluso con el principio de libertad. Los hombres posrevolución francesa han asumido como propio un principio imaginario: que todos pueden ocupar en la sociedad cualquier posición y que tanto la riqueza como el mando pueden cambiar de titular al caer todos los principios trascendentales que fundaron la desigualdad entre los hombres. Dice Tocqueville:

La igualdad de condiciones sociales hace, tanto del señor como del siervo, unos seres nuevos y establece entre ellos nuevas relaciones. (...) En vano la riqueza o la pobreza, el mando o la obediencia, distancia accidentalmente a dos hombres; la opinión pública, que se funda en el orden normal de las cosas, los aproxima a un nivel común y crea entre ellos una especie de igualdad imaginaria, a pesar de la desigualdad real de sus condiciones sociales.

Allí queda expresada toda la fuerza que le atribuye Alexis de Tocqueville a las convicciones, a la opinión pública, a las creencias de los sujetos que habitan una misma sociedad. Tocqueville no cree que los hombres se han vuelto iguales, sino que está sorprendido de que estén convencidos de esto y piensa que el funcionamiento de este principio de igualdad puede cambiar la fisonomía de nuestras sociedades. No fue la Revolución fran-

cesa la que inventó la igualdad, pero fue allí donde se la volvió un principio asociado al de la libertad y la fraternidad que operaban como un mandamiento irrenunciable de la nueva ciudadanía, un credo laico que debía volverse dogma en las nacientes democracias. Aunque no funcionó así en la mayoría de las experiencias política europeas y menos aún en los incipientes estados nacionales de América del Sur.

Sin embargo, como dijimos antes, en la primera mitad del siglo XX, muchas naciones buscaron apaciguar los conflictos sociales gestionando la igualdad. Como lo dijimos más arriba, las experiencias del Estado de Bienestar son buenos ejemplos de ello, pero no los únicos. Hay instituciones que nacieron en el siglo XIX que se forjaron con este principio, como lo fue la Escuela Pública o el Hospital Público (ligado a todos los modelos de salud pública que conocimos y que fueron resultado de la “fiebre higienista” de fines de ese siglo y comienzos del XX).

El siglo XXI se está presentando muy distinto en este aspecto: la igualdad, el motor de la igualdad, la convicción sobre la igualdad, las culturas institucionales basadas en la igualdad, están en crisis. Los Estados Nacionales han decidido desentenderse de la igualdad, del acceso a los derechos para todos.

Pero además de esto, está la enorme experiencia de la desigualdad que vive el capitalismo de hoy, desconocido en toda la historia del capitalismo. Muchos autores han enfatizado esto desde el punto de vista económico (Thomas Piketty, entre otros) pero también están quienes han enfatizado el modo en que el capitalismo se ha tensionado con la democracia liberal justamente en este punto que supone sostener el principio de igualdad.

En *Requiem for the American Dream*, Noam Chomsky recuerda que, en el debate constitucional norteamericano, los representantes de los Estados que buscaban conformar la Federación se encargaron de colocar en manos del Senado un poder mayor a fin de garantizar los privilegios de los más ricos (recordando que los senadores no eran elegidos por voto popular, sino que era un privilegio de los ricos que elegían a estos representantes). James Madison —considerado como el Padre de la Constitución— dejó escrito en las actas de la Convención de Filadelfia que “la mayor preocupación de la sociedad tiene que ser proteger a las minorías opulentas de las mayorías”. Por este motivo, Madison sostuvo que el sistema constitucional debía ser concebido para contener a la democracia, para evitar cualquier exceso de las mayorías pobres ante las minorías poderosas.

Esta otra tensión también ha transitado durante todo el siglo XIX y XX: la inevitable tensión entre los intereses de los más desposeídos que pretenden “democratizar” los bienes que se producen en una sociedad, frente al interés de los más poderosos que necesitan una democracia que les garantice la propiedad y sus riquezas dejando en el mercado cualquier principio de distribución. En realidad, la democracia siempre convivió con estos dos extremos: o protegemos al *demos* de las inequidades del mercado o protegemos a los propietarios de los peligros que supone atender las demandas del *demos*; o se reduce la desigualdad o se reduce la democracia.

El siglo XXI parece haber resuelto este dilema a favor de la desigualdad. Las experiencias de Estado de Bienestar no solo están en retroceso sino que son atacadas sistemáticamente por los aparatos ideológicos de los partidos políticos conservadores, por los medios masivos de comunicación (que cada vez se han globalizado más, se concentran y sus dueños están asociados o pertenecen a los sectores más poderosos y conservadores de la sociedad), los líderes emergentes (que suelen provenir también de los sectores más ligados a la riqueza y el poder) y de las organizaciones de la sociedad civil que están financiadas también por los grandes centros de poder global. Todo este aparato de legitimación se está inclinando en el siglo XXI hacia un solo costado: el costado que repudia la intervención de la política en las reglas de mercado, que considera que el destino de cada individuo depende de sí mismo y que la intervención Estatal en cualquier materia que suponga alguna redistribución de bienes, servicios u oportunidades es un populismo repudiable.

El mismo N. Chomsky sostiene que los movimientos políticos y sociales de los años sesenta y setenta, que fueron movimientos importantes por la igualdad de derechos, de acceso a los bienes simbólicos y materiales de una sociedad, tuvieron una importante reacción de parte de los sectores más poderosos:

Ha habido una enorme ofensiva empresarial bien concentrada y coordinada, que comenzó en los mismos años setenta, para intentar combatir los esfuerzos por la igualdad. (...) El primer informe de la Comisión Trilateral, por ejemplo, trata sobre esto y se llama “La Crisis de la Democracia”. Esta Comisión Trilateral está formada por internacionalistas liberales y formaban parte de la administración Carter. (...) La década de los sesenta fue un desafío general a los sistemas de autoridad existentes y a éstos les preocupaba que se estuviera desarrollando un exceso de democracia.

Una vez más, de lo que se trata es de contener a la democracia.

2. Las profundidades de la desigualdad

En el año 2016, la UNESCO junto al CICS (el Consejo Internacional de Ciencias Sociales) produjo un informe mundial titulado *Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo* que justamente realiza un diagnóstico sobre el estado actual de la desigualdad en el mundo. El punto de partida es la crisis económica del año 2008 y sus repercusiones prolongadas, las insurrecciones populares de la denominada “Primavera árabe”, los conflictos en México y los movimientos sociales en España y el movimiento de los “ocupas” (“*occupy*”) en Wall Street: todos ellos figuran entre los numerosos acontecimientos que han vuelto a colocar a la *desigualdad* en el temario de la agenda política mundial durante el segundo decenio del siglo XXI.

El informe destaca que diversas evaluaciones han llegado a la conclusión de que la desigualdad solo ha crecido y que esta tendencia parece difícil de revertir si no se producen políticas activas en este sentido. En 2015, *el 1 % de la población mundial concentraba en sus manos casi la mitad de la riqueza* poseída por el conjunto de las familias del planeta. Asimismo, *las 62 personas más ricas del mundo poseen por sí solas tantos bienes como la mitad más pobre de la humanidad*.

En el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales de 2016 se llega a la conclusión de que la desigualdad puede poner en peligro la sostenibilidad de las economías, sociedades y comunidades. No se trata solo de un tema ético o de posicionamiento sobre la distribución de los bienes y servicios que hoy están disponibles en el planeta como sino de un tema mayor: la sostenibilidad de nuestra vida en común. Por este motivo, dice el informe que es necesario conocer los rasgos fundamentales de la desigualdad para pensar las políticas que pueden modificar esta tendencia hasta hoy irreversible. La creación de sociedades más equitativas exige un mejor conocimiento de la desigualdad en general, así como de los vínculos existentes entre la desigualdad económica y otras formas de desigualdad, por ejemplo, las que se dan en materia de género o en los ámbitos de la educación y la salud.

Por eso, haríamos mal en pensar que el problema político que le presenta la desigualdad al mundo actual está centrado en los bienes materiales exclusivamente. El problema es más complejo y compromete diferentes dimensiones de la vida social y cultural. En el Informe se examinan siete dimensiones de la desigualdad y cómo su interacción llega a conformar la vida de las personas, creando un círculo vicioso de desigualdad.

En cualquier sociedad, las desigualdades, además de ser económicas, son también políticas, sociales, culturales, ambientales, territoriales y cognitivas. Y por eso abordar este tema requiere un tratamiento integral del problema. Y hay en este terreno una preocupación que ha crecido tal vez más —en los ámbitos académicos que entre los responsables de las políticas públicas— por lo que sabemos que, desde 1992, los estudios centrados en investigar y poner el acento en el crecimiento de las desigualdades (y la justicia social) se han quintuplicado.

El informe de UNESCO-CICS dice el origen del aumento de las desigualdades económicas en los últimos años parece remontarse a los decenios de 1980 y 1990, cuando el modelo neoliberal llegó a ser predominante en los países occidentales y se fue extendiendo paulatinamente a otras partes del mundo, en el contexto de la globalización y el dominio del capital financiero de la economía tras el desmoronamiento del bloque de los países del Este.

Pero no podemos dejar de subrayar que este viraje económico que trajo la globalización fue acompañado por una ideología que seguía sosteniendo el liberalismo del siglo XIX: la riqueza de los ricos, la acumulación de los bienes y recursos en manos de los más favorecidos terminaría favoreciendo a todos. François Guizot, quien fuera parte del gobierno durante la monarquía de Luis Felipe de Orleans en la Francia restauradora del siglo XIX (y líder de los doctrinarios liberales de la época) fue consultado en una oportunidad por un grupo de hombres poderosos: “¿cómo podemos contribuir con la grandeza de Francia?”, preguntaron. A lo que Guizot respondió: “Enrichissez-vous!” (¡enriquezcanse!), lo que pasó a la historia como una de las “frases malditas” de la política francesa y una de las fórmulas más simples de explicar la llamada “teoría del goteo” que pregona el liberalismo.

No es menor esta lectura ideológica sobre la forma de crear el bienestar de los otros: simplemente maximizando el bienestar propio, las riquezas propias. Esta idea partía de la hipótesis de que, en última instancia, las poblaciones pobres y vulnerables sacarían provecho de la lenta filtración de los beneficios del crecimiento económico generados por las fuerzas del mercado. Sin embargo, sostiene el mismo informe de la UNESCO – CICS, esa hipótesis no ha llegado a plasmarse en los hechos en ningún lugar ni en ningún momento de la historia.

Es más, lo que registra el informe es que, aunque en algunos países —tanto desarrollados como emergentes— se registraron *altos índices de crecimiento económico* —a veces como consecuencia de la liberalización de sus economías—, la desigualdad en general, y más concretamente la desigual-

dad de ingresos, aumentó rápidamente. Esto ha sido muy claro en algunas economías latinoamericanas que en los últimos 10 o 12 años vivieron procesos virtuosos de crecimiento. Sin embargo, la distribución de esas riquezas sigue siendo un déficit de las democracias.

Pero las cifras de los organismos internacionales ponen de relieve el aumento considerable de la desigualdad de ingresos a lo largo de las últimas tres décadas no solo en las economías latinoamericanas, sino también en países del hemisferio norte como los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. En ese periodo se han registrado incluso aumentos sustanciales de la desigualdad en algunos países como Suecia (que fue la cuna de los modelos de Estado de Bienestar con alta regulación de la economía y sobre todo de la vida social), donde el nivel de disparidad de ingresos era poco elevado antes de la década de 1980.

Para los países de economías emergentes, en algunos de ellos —como Colombia, Brasil y la India— se observan niveles de desigualdad de ingresos más elevados que en los países del hemisferio norte, sostiene el Informe. Hoy en día, Sudáfrica es el país del mundo con el índice de desigualdad de ingresos más alto, aunque haya experimentado una reducción en estos últimos años.

Estos señalamientos con respecto al crecimiento de la desigualdad fueron retomados por muchos organismos internacionales. El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y consigna entre sus objetivos centrales acabar con la pobreza, afrontar el cambio ambiental y luchar contra la desigualdad y la injusticia. Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) forman parte de un nuevo programa de desarrollo sostenible que se ha comprometido a garantizar “que nadie se quede atrás”, una especie de consigna de época tendiente a promover políticas de equidad.

Por este motivo, los ODS se proponen como finalidad específica “*reducir la desigualdad en y entre los países*” y otros puntos de estos objetivos tienen como propósito contribuir a la reducción de las desigualdades y promover la integración social de aquí al año 2030. “*En y entre los países*” son empresas convergentes, pero bien distintas, pero ambos quedaron plasmados en este documento de las NU también porque son difíciles de disociar. En resumen, el tema de la desigualdad y las formas de cambiar esta tendencia estuvieron muy presentes entre los que redactaron estos objetivos del desarrollo en las próximas décadas.

Vale la pena recoger dos objetivos del Informe que están vinculados directamente con el tema que estamos tratando:

- Trascender la desigualdad estrictamente económica para examinar las interacciones que se dan entre las múltiples dimensiones de la desigualdad.
- Analizar las consecuencias de las desigualdades en diferentes países y regiones, así como en diversos grupos de población.

Estos dos puntos son fundamentales y ponen el énfasis en considerar las desigualdades de modo plural. Es decir, resulta necesario complejizar y poner en valor los vínculos que existen entre las múltiples dimensiones de la desigualdad al tiempo que, tanto a nivel regional como de países, es imprescindible realizar un mapeo de estas desigualdades para mostrar las heterogeneidades que allí se presentan.

En el Informe también se reconoce que la pobreza, la desigualdad y la justicia social guardan una estrecha relación entre sí. Estos tres conceptos suelen presentarse de manera disociada y muchas veces ni siquiera parecen estar en el mismo escalón de las consideraciones: los gobiernos neoliberales se proponen muchas veces enfrentar la pobreza sin considerar las condiciones estructurales que la provocan y solo la consideran como un efecto no deseado del sistema económico. Lo que hace el informe es mostrar la estrecha relación que guarda la pobreza con la desigualdad y con la ausencia de políticas que se basen en principios de redistribución, equidad y justicia social.

Por este motivo, la desigualdad debe ponerse en contexto y se debe analizar en sus diferentes dimensiones. El informe examina justamente sus dimensiones (diversas pero que operan de manera articulada) y también los diferentes contextos en los que se registra la desigualdad. He aquí algunas distinciones que están presentes en el informe y que resulta imprescindible señalar:

- *La desigualdad económica*: diferencias entre niveles de ingresos, bienes, patrimonio y capital, estándares de vida y empleo.
- *La desigualdad social*: diferencias entre el estatus social de distintos grupos de población y desequilibrios en el funcionamiento de los sistemas de educación, salud, justicia y protección social.
- *La desigualdad cultural*: discriminaciones basadas en el género, la etnia y la raza, la religión, la discapacidad y otras identidades grupales.
- *La desigualdad política*: capacidad diferenciada de los individuos y grupos para influir en los procesos de elaboración de decisiones en materia de políticas, así como para beneficiarse de esas decisiones y tomar parte en la acción política.

- *La desigualdad territorial*: disparidades territoriales y regionales entre núcleos centrales y periferias, entre zonas urbanas y rurales, y entre regiones con mayor o menor diversidad de recursos.
- *La desigualdad en los riesgos*: grado de exposición a contaminaciones y riesgos; y diferencias en los medios necesarios para adaptarse a esos riesgos.
- *La desigualdad de conocimientos*: disparidades en el acceso y la contribución a distintos tipos y fuentes de conocimiento, así como las consecuencias de esas disparidades.

Para terminar, vale la pena destacar algunas de las consecuencias que señala este informe y que se vinculan con la democracia y la cohesión social. Si bien las desigualdades tienen su origen en las estructuras básicas de la economía, la distribución de los recursos y el acceso a los bienes y servicios disponibles en una sociedad, lo cierto es que si el poder económico y político se concentra cada vez más en manos de un número muy reducido de personas —dice el Informe— esto puede hacer peligrar no solo el crecimiento económico, sino también los lazos sociales más básicos y el buen funcionamiento de nuestras democracias.

Por otro lado, la reducción de las desigualdades es un imperativo ineludible en el campo de los derechos humanos y la justicia social, pero al mismo tiempo es un factor esencial para conseguir éxitos en otros ámbitos prioritarios globales como la sustentabilidad ambiental, la solución de conflictos a nivel nacional y regional y también al acuciante tema de las migraciones.

No se debe entender entonces que las desigualdades se limitan a las disparidades en materia de ingresos o riqueza y que se deben tratar exclusivamente en esos ámbitos. Se da una interacción de las desigualdades en siete dimensiones clave, a saber: económica, política, social, cultural, ambiental, territorial y cognitiva y por ello las respuestas que la sociedad debe dar a este problema son múltiples, complementarias y necesariamente coordinadas. Sin dejar de reconocer que en las respuestas que dé una sociedad al tema de las desigualdades se deben reconocer y abordar tanto los legados históricos específicos como las prácticas culturales profundamente arraigadas que refuerzan estas estructuras.

3. De las desigualdades globales a las políticas locales

El diagnóstico que acabamos de presentar en torno al tema de las desigualdades (como tema global y de época) necesita ser tratado con la especifici-

dad del caso en cada uno de nuestros países. Reconociendo siempre los rasgos comunes que tienen los procesos políticos latinoamericanos, en nuestros países tiene su color propio y su especificidad. Y también sus historias de resistencia a los procesos ya conocidos que operan en el capitalismo (y más en esta etapa de capitalismo financiero) que consisten en profundizar la concentración y la desigualdad como dos procesos complementarios.

Nuestra región vivió un ciclo de más de diez años en los que las políticas públicas apuntaron a reposicionar al Estado en el centro de la escena política y económica y con ello proteger el empleo y la industria local, proteger el mercado interno, desendeudarse y distanciarse de los organismos internacionales que ordenaban nuestra economía, promover cadenas de valor en las que nuestros países fueran competitivos en los mercados globales, desarrollar las instituciones que promueven el conocimiento, la ciencia y la tecnología propias y volverse menos dependientes de los grandes centros internacionales.

Pero lo que hoy se registra en Argentina —aunque no solo aquí— es que nos encontramos ante un evidente *cambio de ciclo* que comenzó a producirse a fines del año 2015 cuando se concretó un cambio de gobierno, y junto con ello un brusco cambio en las políticas económicas y sobre todo una nueva concepción del Estado en cuanto a sus funciones, vínculos con el mercado y la economía más en general. Paralelamente se comenzó a dibujar un nuevo mapa de relaciones donde se concibe a la Argentina en otro lugar tanto en la región como en el orden mundial. Todo esto se produce de la mano del ascenso de un nuevo gobierno democrático (que contó con el consenso de más de la mitad de los ciudadanos argentinos) y que luego de doce años de gobiernos que enfatizaron el rol del Estado y la intervención en la economía para producir políticas de equidad, se perfila como un nuevo ciclo político, económico y social donde será el mercado el ordenador de la economía y del destino de los ciudadanos.

Tal vez una de las variables de mayor contraste tenga que ver con el retiro de la acción pública de las esferas de la economía, un diagnóstico negativo sobre cualquier intervencionismo estatal, una distancia con las políticas de asistencia a las emergencias sociales y donde se renueva la confianza en las fuerzas de la economía de mercado para resolver los temas financieros, las demandas de las empresas (grandes, pequeñas y medianas) y los problemas que se plantean en el mundo del trabajo.

Estos nuevos parámetros nos hacen ver que este es un cambio profundo y estructural y no puede interpretarse como una política de “correcciones” sobre el modelo que estaba en vigencia hasta el año 2015. En efecto, desde

el Estado, en los primeros meses de la nueva gestión, se impulsa otro modelo de acumulación basado en las expectativas de inversión externa, crecimiento del perfil exportador de bienes primarios y el endeudamiento con los organismos internacionales de financiación y sobre todo con una mirada muy diferente al modelo anterior (que podemos denominar neodesarrollista) que se basaba en la protección del empleo y que claramente estaba orientado al mercado interno y al consumo.

El nuevo ciclo que se abre en Argentina concibe al Estado como instrumento que debe garantizar el buen funcionamiento de las iniciativas de las empresas y de los emprendedores privados, que favorezca la transparencia y la eficiencia en la gestión pública con el fin de mejorar las metas de inflación, reducir el gasto público, atraer a las inversiones extranjeras, reducir el empleo público (que se considera como incrementado artificialmente por el empleo de la militancia política) y modernizar las funciones estatales introduciendo tecnologías y modelos de gobierno abierto y distintas herramientas que provienen del “new public management”.

La ruptura es bien clara con relación a los conceptos rectores de la economía que proponen un mercado interno activo y un modelo de crecimiento basado en la protección del mercado propio y en el apoyo a las empresas que operan tanto en la sustitución de importaciones, como en el mejoramiento de la competitividad en aquellas cadenas de valor donde la Argentina puede mostrar un perfil competitivo (o un perfil complementario con otras economías de la región y del mundo). Este modelo se sostuvo aún ante la crisis en el sector externo y propuso como alternativa para crecer el apoyo al mercado interno y tal vez por eso, en uno de sus peores años, la economía argentina creció en un 2,4 % durante el 2015.

Para el gobierno que asumió en diciembre de 2015, por el contrario, la alternativa es “fortalecer” el sector externo vía devaluación y la quita de retenciones a los exportadores de bienes primarios (incluyendo a la minería), disminuyendo drásticamente el consumo para volver a “superar” la restricción externa y apuntar a un control de la inflación basado en una mirada monetarista que simplemente produzca una retracción del circulante (que los ciudadanos tengan menos dinero en sus bolsillos y que las empresas restrinjan cualquier tipo de expansión) y un Estado que deje de gastar o invertir en obra pública o asistencia social.

La estrategia de arranque del nuevo gobierno fue bajar el consumo y promover superávit en el sector externo, confiando además en que las inversiones vendrían luego de acordar con los fondos buitre el pago de todo lo que reclamaban, recomponer las relaciones con el FMI y los organismos internacionales de crédito y volverse confiables para los inversores interna-

cionales que deberían ver a la Argentina como un nicho de negocios nuevo y con una economía en expansión. Este modelo descree de la potencia que podría tener el mercado interno y se aleja de aquella concepción que supone su estímulo vía el gasto público.

Pero tal vez lo más importante para lo que estamos analizando en materia de crecimiento de las desigualdades esté centrado en la instalación exitosa de la creencia de que si se le quitan trabas a los sectores más concentrados de la industria, del comercio exterior y sobre todo del sector financiero, la reactivación de la economía estaría asegurada y la Argentina viviría una etapa de expansión basada en la inversión externa y el bienestar de los trabajadores (para los que no se han registrado políticas que los protejan o favorezcan específicamente) dependería, una vez más, de la “teoría del derrame”. Justamente la teoría del derrame a la que hace referencia el Informe de UNESCO – CICS: debemos aceptar que cualquier redistribución de los bienes disponibles en una sociedad se habrá de producir como resultado del consumo de los sectores sociales más poderosos o de las inversiones que se produzcan como resultado de una apertura económica que favorezca a los capitales internacionales que se radiquen en el país.

Pero este nuevo ciclo supone también la puesta en marcha de una nueva política —en clara discontinuidad con los últimos 12 años— en lo que se refiere a la inserción regional y global (el “abrirse al mundo”) de la Argentina: habrá que romper el tejido de alianzas, inversiones y valores que se vinculaban a la cooperación sur-sur, o con los nuevos bloques de países emergentes (el BRICS, por ejemplo) y asociarse a las grandes alianzas transoceánicas de libre comercio, lideradas por los Estados Unidos y dejar atrás la institucionalidad de integración forjada en la última década (MERCOSUR, UNASUR, CELAC). Aunque este panorama puede cambiar, no por un cambio en las políticas locales, sino justamente por los cambios que se pueden producir en las economías de los países centrales como resultado de las últimas elecciones en los EE.UU.

Entre las incertidumbres que se perciben, la que más parece preocupar a los sectores más desprotegidos de la sociedad es el temor a la pérdida del trabajo y a un futuro donde habrá bajo crecimiento con una inflación que parece moderarse, pero no disminuir drásticamente y una nueva matriz de la economía a partir de la apertura a los productos internacionales y la caída de la producción local de productos manufacturados en el país. Lo que no se registra luego de un año del nuevo gobierno es una baja en la pobreza (todos los indicadores la muestran en alza) y no aparecen en el horizonte políticas de redistribución del ingreso como no sean las ya mencionadas anteriormente y que solo se ligan a la teoría del derrame,

que opera más bien como una ucronía: en algún momento futuro (y no en algún lugar) los beneficios económicos nos alcanzarán a todos.

Pese a este drástico cambio y a la caída en las expectativas de los sectores asalariados, el gobierno de Cambiemos cierra su primer año con una imagen positiva más que aceptable. La pregunta es, nuevamente, por qué la sociedad acepta un modelo político y económico donde la desigualdad se acentúa y las políticas no apuntan a solucionarlas, y lo que denominamos *la cuestión social* tiende a agravarse, la suba de la indigencia, pobreza junto con el desempleo y subempleo parece conformar una primera fractura social, caracterizada por un primer escalón descendente y si no se toman medidas proactivas se puede descender otro escalón en los próximos meses.

El informe de la UNESCO enfatiza dos o tres variables que se constatan en este nuevo panorama: por un lado, la preeminencia del sector financiero, un conjunto de medidas que se encaminan a favorecer a los sectores más concentrados de la economía (el sector agroexportador y de *commodities* de las agroindustrias) y por otro lado la desprotección (y el bajo incentivo) para los mercados locales que redundará en consecuencias muy negativas para las PyME (que además tienen un alza de las tarifas de los servicios básicos, apertura de la economía y reducción de los incentivos fiscales) y que no pueden competir con la agresividad de la oferta de productos manufacturados en los mercados globales.

Tal vez sea necesario complementar este análisis con otro “cambio de ciclo” del capitalismo tardío y de lo que muchos autores han denominado “posdemocracia”. Esto es, un esquema político donde el poder se ejerce desde un proyecto que no solamente se basa en alentar las iniciativas del ámbito privado, desactivar los mecanismos de intervención estatal en todo lo que tiene que ver con redistribución, sino también en un cambio cultural que ve al ciudadano como un emprendedor privado y que enfatiza el camino de vida personal por sobre cualquier proyecto de solidaridad social. Esta posdemocracia significa también que estamos en un período donde la vieja y tradicional democracia no se percibe ni con aquella fórmula roussoniana de “deliberación en la plaza pública” ni de las teorías de la representación provenientes de la Revolución francesa y del liberalismo del siglo XIX. Más bien se trataría de eso que Jacques Rancière definió como una “democracia sin demos”, sin pueblo, sin participación, sin principios del Bien Común, sin la instancia hegeliana de “lo general”, sino más bien una democracia que alienta al ciudadano a seguir su camino de vida personal y que acepta la desigualdad como un resultado de los éxitos o fracasos que cada uno ha logrado en su trayecto

de vida. Esta concepción es solidaria también con la desactivación de los mecanismos de seguridad social (que el modelo de Estado de Bienestar había impuesto) y que deja también en manos privadas los servicios básicos que solía prestar el Estado. El tema de nuestro tiempo es que este otro “cambio de ciclo” se está produciendo con un importante consenso de la sociedad.

En la posdemocracia actual, complementaria con todas las características del capitalismo tardío que venimos conociendo, el pueblo desaparece de la escena política y su rol y peso en la toma de las decisiones es sustituida por una élite corporativa de clase y tecnocrática (muchas veces provenientes de los cuadros empresariales), donde la soberanía del pueblo es reemplazada por la soberanía y el poder del mercado y desaparece la política tal como la conocimos en el siglo XIX y XX. “El poder vuelve al poder”, ha dicho Daniel García Delgado.

De esta forma, la nueva política se reduciría a la interacción entre los gobiernos, los electores y las élites corporativas por fuera de las escenas clásicas del espacio público, con gran preeminencia de los medios masivos de comunicación, desactivando la calle y la plaza como espacios de expresividad política y desactivando las demandas sociales sobre los gobiernos. De manera complementaria, se profundizaría el vínculo y el diálogo entre las organizaciones que representan intereses económicos directos (al tiempo que cae el sistema de mediaciones clásico que supone la estructura de partidos políticos) y con una activa participación de los organismos multilaterales de crédito y de organismos internacionales como el FMI o la OCDE.

Este predominio de las fuerzas del mercado en la política, paradójicamente, no es considerado escandaloso, como lo fuera en el pasado, como algo que debía ser ocultado de alguna forma. Por el contrario, es abiertamente normalizado y de hecho las instituciones públicas quedan subordinadas a esta dinámica. El pueblo (el *demos*) es registrado en la esfera política no como “ciudadanos con derechos” sino como conjunto o número de individualidades a ser administrado y ordenado por los poderes públicos. En este esquema, también hay un gran cambio en el papel que juega el marketing político que toma un lugar central en la constitución del nuevo poder, y vemos cómo el nuevo modelo comunicacional reemplaza al representativo. Se forja de esta manera una nueva cultura ciudadana, un nuevo sistema de expectativas que el ciudadano debe tener ante la política o los poderes públicos.

La dinámica más llamativa, tal vez a la que debemos prestar más atención, radica justamente en este corrimiento del debate económico al cul-

tural: cuando más se posterguen los logros económicos que favorezcan a las mayorías, más se necesita la cultura, para solidificar un nuevo pacto ideológico que rechace el regreso a cualquier pasado populista (al que se lo responsabiliza de todos los males actuales) y se espere menos de las políticas públicas y más de las iniciativas personales. Estamos viviendo la construcción de un nuevo perfil de Estado, pero también una nueva ciudadanía.

En esta etapa de posdemocracia, la magnitud del debate político se transforma en un espectáculo controlado, manejado por expertos y regulado por los medios de comunicación dominantes, donde se tratan temas seleccionados por ellos y donde la ciudadanía queda reducida a los estudios de opinión y a la participación en las redes sociales. El ciudadano que se expresa en las redes no es un problema para los poderes fácticos, sino que, tal vez, es el ejercicio de la ciudadanía que más le conviene a un Estado que pretende desactivar las escenas políticas que forjaron la modernidad. El uso intensivo y profesional de las redes (Instagram, Twitter, Snapchat, etc.) se transforman en un nuevo lenguaje (que combina imágenes, pocas palabras y la construcción de escenas políticas no públicas) que se ajusta bien a un tipo de dirigente posmoderno. Gana fuerza una idea complementaria que es la que hemos denominado “comunicación política posmasiva” y que es solidaria con los rasgos esenciales de la posdemocracia.

En esta posdemocracia también cambian los parámetros de ciudadanía y la consideración que la política hace del *demos*. El político se vuelve un técnico que valida su *expertis* en un campo lejano a la gestión pública, el Estado promueve y administra, pero no amplía ni crea derechos y el ciudadano se transforma en un vecino cuyos problemas específicos no necesariamente se pueden sumar a los intereses o demandas de otros vecinos. A este ciudadano de puertas para adentro se llega o bien por los medios de comunicación o tocándole el timbre de su casa. Este modelo no admite ninguna referencia a activos comunitarios, a valores y a derechos que vayan más allá de los que propone el ideario del individualismo neoliberal. Por este motivo, el cambio de época no solo remite a una concepción del Estado y de las políticas públicas, sino a un nuevo modelo de cultura política que sea capaz de calar hondo en los ciudadanos desencantados con los gobiernos populares.

Por este motivo, cuando volvemos a pensar el tema de los modelos económicos que profundizan (e incluso apuestan a) las desigualdades, no podemos dejar de asociarlo a una serie de valores que tienen que ponerse en juego y que tienen que ganar espacio en nuestras sociedades que vienen

de experiencias políticas diametralmente opuestas: no se trata solo de remodelar las estructuras del capitalismo tardío y dismantelar el neokeynesianismo que conocimos con los gobiernos anteriores, sino que vuelve a estar en juego la necesidad de imponer un nuevo marco de legitimidad en el campo de la política, una nueva cultura política que sustente a la posdemocracia.

Todo este proceso supone también dismantelar lo que fueron los conceptos rectores y solidarios que nos legó la tradición liberal y revolucionaria de Francia y que quedaron plasmados en tres principios, en las tres las palabras que recorrieron el mundo y construyeron imaginarios, utopías e identidades: libertad, igualdad y fraternidad. Tres palabras que, además, funcionaban de manera combinada y solidaria. Alexis de Tocqueville, como hemos dicho, también supuso que funcionaban en tensión, pero que, sin embargo, no era posible disociarlas de la experiencia democrática moderna.

En su libro *¿Por qué preferimos la desigualdad?*, el pensador francés Francois Dubet sostiene que vivimos una época donde las solidaridades están en crisis y en la que nuestras sociedades parecen “elegir” la desigualdad antes que sostener el viejo principio que forjó la Revolución francesa. Y este fenómeno no es reciente, se remonta —también como lo hemos dicho más arriba— a las respuestas conservadoras de los años 80 frente a lo que fueron los movimientos sociales y políticos de los 60 y 70. Los EE.UU. de Ronald Reagan y la Inglaterra de Margaret Thatcher llevaron a cabo “revoluciones” resueltamente desigualitarias, proclamadas como tales y con un importante apoyo popular en ambos casos. En nuestros días, muchos movimientos políticos europeos (y nosotros agregaríamos latinoamericanos) están encaminados a sostener este mismo principio.

Para Francois Dubet vivimos una etapa del capitalismo en la que la concentración de la riqueza ha producido las mayores brechas económicas de toda la historia, pero lo que más le sorprende es que en nuestras sociedades comienzan a escucharse discursos (no solo en boca de los dirigentes políticos y de los medios de comunicación sino del ciudadano común) que rechazan las políticas de equidad que intentan introducir los gobiernos inspirados en los principios de la Revolución francesa: los pobres, se dice, roban a la seguridad social, los desocupados abusan de sus derechos y los barrios pobres se han convertido “en zonas de no derecho”. Dice Dubet que “aunque todos lo lamenten, los lazos de solidaridad que nos llevaron a desear la igualdad social están, al parecer, irremediabilmente debilitados”. Es decir, vivimos en un tiempo de posdemocracia que es también un tiempo de construir sociedades, valores, Estados e instituciones surgidas no de

las “revoluciones” que caracterizaron a la modernidad sino de ideologías, poderes y organismos globales que están dispuestos a quebrar definitivamente el orden moderno de la política e instalar la *desigualdad* como un valor natural o, al menos, como un principio deseable para nuestras sociedades. 